

Resucitando la designación de régimen autoritario? Perú bajo Fujimori, 1995-1998.

Cynthia McClintock
Facultad de Ciencias Políticas
Universidad George Washington
Washington, D.C. 20052

A publicarse próximamente en, La Política Bajo Fujimori, Fernando Tuesta, editor (Fundación Friedrich Ebert: 1999).

En la década de los años 90, los gobiernos latinoamericanos son catalogados crecientemente como democráticos—aunque con adjetivos calificativos.¹ Entre esos calificativos, los que han tenido mayor resonancia en el ámbito académico han sido la “democracia de baja intensidad” de Abraham F. Lowenthal,² la “democracia delegativa” de Guillermo O’Donnell,³ y más recientemente, la “pseudo-democracia” de Larry Diamond.⁴ El impulso de estas conceptualizaciones ha sido comparar a los países latinoamericanos con otras democracias en el mundo para mostrar que los casos latinoamericanos no cumplen los requisitos clave en algunos aspectos.

Si bien esta labor académica es muy importante, dicha obra no plantea una pregunta relevante: ¿son los casos latinoamericanos que no cumplen la clasificación de democracia “completa” necesariamente superiores a los regímenes autoritarios? El supuesto subyacente de este capítulo es que esta clasificación es extremadamente importante no sólo en términos de las teorías académicas, sino también, para la discusión de temas de la realidad.

Hacia fin de Siglo, vivimos en una época en la que un régimen latinoamericano que se considere autoritario arriesga convertirse en un estado paria ante la comunidad internacional. Sin embargo, este capítulo argumenta que a pesar del significado en la distinción entre una “democracia con adjetivos” y un régimen autoritario, los límites relevantes no han sido claramente delineados ni por los académicos ni por los observadores electorales. La diferencia fundamental entre ambos es la capacidad de la oposición de competir libre y justamente en elecciones nacionales—aunque hay un sinnúmero de variables que son relevantes para una evaluación de sí una competencia electoral es o no es libre y justa. Dado este sinnúmero de variables, evaluaciones objetivas sobre esto pueden ser dificultosas, sino imposibles.

Además de desenredar esta confusión conceptual, este capítulo busca evaluar el gobierno de Alberto Fujimori post-1992, enfatizando que debe de considerarse la etiqueta de régimen autoritario para el este. En el marco de la consideración de un calificativo de régimen autoritario, este capítulo también argumenta algunos puntos que son relevantes sobre la oposición política del Perú actual. Primero, que históricamente la comunidad internacional se ha aprovechado de las dificultades que existen para evaluar objetivamente el nivel de libertad y justicia de una contienda electoral para declarar como justa la victoria de un partido político favorecido, y como fraudulenta la victoria de un partido no favorecido. Segundo, que tanto para la oposición como para un régimen titular favorecido por la comunidad internacional, una de las modalidades para provocar una discusión sobre si un régimen es o no autoritario, es no sólo citar los obstáculos existentes para una competencia libre y justa en un país, sino, todavía más importante, boicotear las elecciones.

¹ Collier y Levitsky (1997: 430-451). Para otros iluminadores debates sobre la definición de democracia, ver, Hartlyn (1995).

² Lowenthal (1992-1993: 74-92).

³ O’Donnell (1994: 55-69). Una democracia delegativa es un régimen que no es ajeno a la tradición democrática. Es más democrático pero menos liberal que una democracia representativa. Una democracia delegativa (DD) es fuertemente mayoritaria. Consiste en constituir, mediante elecciones limpias, a una mayoría que potencialize a alguien, por un número determinado de años, a personificar e interpretar los altos intereses de la nación.

⁴ Ver, Diamond (1996: 21-25).

I. CLASIFICACIÓN ACADÉMICA DE REGIMENES: LA “DEMOCRACIA CON ADJETIVOS” Y LOS REGIMENES AUTORITARIOS.

En las últimas décadas ha habido un fuerte consenso entre los académicos basados en EE.UU. sobre la definición de democracia. Dicho régimen tendría dos componentes: 1) que los procesos electorales sean justos, y 2) que el contexto electoral sea libre (sin intimidación oficial o represión de un grupo que pretende participar).⁵ En los regímenes democráticos que son calificados con un adjetivo, se dan a menudo deficiencias en cuanto a lo justas y libres que son las contiendas electorales, o en cuanto a lo nivelado que es el terreno electoral.

Pero, cuál es entonces la diferencia entre un régimen “democrático con adjetivos” y un régimen autoritario? Como se mencionó en la introducción de este capítulo, no existe un consenso académico sobre la distinción entre ambos conceptos, ni una clara especificación de los límites necesarios. Considérese por ejemplo la pseudo-democracia” de Larry Diamond, en la que él considera que la competencia electoral no es lo suficientemente justa como para que el partido oficial pueda ser sustituido en el poder aunque se tolere la existencia de partidos independientes de oposición.⁶ Sólo a los regímenes que no permiten el funcionamiento de partidos políticos se denominan como “autoritarios.”

Sin embargo, lo que es pseudo-democracia” para Diamond es un “régimen autoritario” para el connotado académico Juan Linz:

[regímenes autoritarios son] sistemas políticos con un pluralismo político limitado y no responsable, sin ideología rectora o complicada, pero con mentalidades propias, sin movilización extensa o intensa, salvo en algunos momentos de su desarrollo, en la que un líder, o de vez en cuando un pequeño grupo, ejerce poder dentro de parámetros formalmente perversos pero que también son bastante predecibles”⁷

Para Linz, el ejemplo principal en Latinoamérica de un régimen autoritario es México. Dicha clasificación del caso mexicano ha sido ampliada y desarrollada por varios académicos.⁸ No obstante, han habido numerosos regímenes latinoamericanos que, al igual que México, no fueron necesariamente faltos de popularidad, que permitieron actividad partidista y sostuvieron elecciones--y que incluso posiblemente realizaron conteos electorales precisos--pero que fueron ampliamente reconocidos como autoritarios.⁹

Es muy importante para las secciones posteriores de este capítulo señalar que Linz argumenta que las elecciones realizadas bajo los auspicios de un régimen autoritario presentan

⁵ Estos son, por ejemplo, componentes cruciales de la democracia electoral” de Diamond. Quien también describe la “democracia liberal” como una en la que existen frenos y equilibrios (*checks and balances*) entre el poder ejecutivo y las fuerzas militares y otras fuerzas políticas y sociales que no le sean responsables (accountable) al electorado de no retener un ?dominio reservado” del poder. Ver también, Diamond, Linz y Lipset (1989: XVI); Przeworski (1991); y Peeler (1985: 5), entre otros.

⁶ Diamond (1996: 25).

⁷ Linz (1975: 175-411).

⁸ Ver Middlebrook (1994).

⁹ Posteriormente se analizan algunos casos específicos.

serios dilemas a los partidos de oposición. Particularmente a lo que se refiere a la decisión sobre si participar o no en la contienda. Linz dice: la semi-libertad de estos regímenes imponen sobre sus adversarios ciertos costos que son muy distintos a la persecución política y que explica su frustración, desintegración y algunas veces, su disponibilidad a la coartación.”¹⁰

Se pueden levantar algunos cuestionamientos sobre la diferencia entre el concepto de la “democracia delegativa” de O’Donnell el de régimen autoritario. O’Donnell caracteriza una “democracia delegativa” como:

...más democrática, pero menos liberal que la democracia representativa. La democracia delegativa (DD) es fuertemente mayoritaria. Consiste en constituir, mediante elecciones limpias, a una mayoría que potencialize a alguien, por un número determinado de años, a personificar e interpretar los altos intereses de la nación.”¹¹

Sin embargo, en la medida en que el poder esté concentrado en el ejecutivo y le sea negado a otras instituciones como a la legislatura y al poder judicial, surgen importantes cuestionamientos sobre las leyes que enmarcan los procesos electorales. En muchos países latinoamericanos, el rol de las legislaturas y especialmente del poder judicial no es simplemente el de frenos y equilibrios (*checks and balances*) en un proceso democrático. Un rol fundamental de estos es el establecimiento de las leyes e instituciones que rigen el campo electoral y la votación. Llega un momento en que el poder legislativo y/o el poder judicial se ven tan dominados por el ejecutivo que desaparece la posibilidad de celebrar elecciones libres y justas.

No debe sorprendernos entonces que la confusión académica existente entre las “democracias con adjetivos” y los regímenes autoritarios, y la falta de claridad en cuanto a límites objetivos han impedido una clasificación del gobierno de Alberto Fujimori en el Perú. Desde aproximadamente 1993, los académicos basados en EE.UU. han tenido mucha dificultad para clasificar dicho gobierno.

Mientras que la mayoría de estos analistas coincidieron inmediatamente después del autogolpe de abril de 1992 en que dicho suceso no fue democrático, la promulgación de la nueva constitución en 1993 y la reelección de Fujimori--por un amplio margen--en 1995, insto a algunos analistas a devolverle a Perú la etiqueta de “democracia con adjetivo.”¹²

Ningún analista continuó considerándolo como autoritario. La mayoría de estos se abstuvo de utilizar cualquier clasificación que distinguiera entre democracia y autoritarismo.¹³ Más bien, estos optaron por variantes del concepto de populismo.¹⁴

¹⁰ Linz (1975: 273).

¹¹ O’Donnell (1994: 60)

¹² Stokes habla de la restauración democrática en “un sentido formal,” ver Stokes (1996: 70). Cameron y Mauceri clasifican al régimen como una “democracia delegativa degenerada,” ver Cameron y Mauceri (1997: 241).

¹³ La naturaleza “ambigua” del régimen se destaca en Cameron (1998: 126) y Crabtree (1995: 9-11). Aunque Conaghan (1998) es muy crítica del régimen de Fujimori, ésta no lo cataloga como autoritario.

¹⁴ Ver Palmer (1996: 70-76); Roberts (1995: 82-116); Weyland (1996: 3-31) y Kay (1996-1997: 55-98).

Al mismo tiempo, es importante notar que la tendencia entre los académicos basados en EE.UU. es contraria a la tendencia de sus contrapartes en el Perú. Las definiciones peruanas de democracia tienden a no ser las convencionales expuestas por sus colegas en EE.UU.¹⁵ A pesar del autogolpe la mayoría de peruanos evaluaron como “democrático” al gobierno de Fujimori en 1992.¹⁶ Hoy en día sin embargo (como lo muestra el Cuadro 2), muchos más lo ven como autoritario. Concomitantemente, los analistas basados en el Perú son más propensos a clasificar al régimen como autoritario.¹⁷

II. PRELUDIO AL AUTOGOLPE: POLITICA PERUANA, 1990-1992.

El 5 de abril de 1992, Fujimori lanzó el autogolpe: suspendió la Constitución de 1969, arrestó a varios líderes de oposición, disolvió el Congreso y desmanteló la judicatura. Perú se convirtió en el único país latinoamericano que sufriera una ruptura democrática en los años 90 después de haber retornado a la democracia en los años 80.¹⁸ ¿En que medida fue el autogolpe resultado de problemas objetivos que Fujimori no podía resolver sin el golpe,? Y ¿en que medida fue el autogolpe resultado de una voluntad política autoritaria que parece ser una característica perdurable del liderazgo de Fujimori? A mi juicio la segunda interpretación esta fundamentada por la trayectoria de los eventos. Además, el pasado de Fujimori debe ser tomado en cuenta por los analistas para poder tratar de predecir sus futuras acciones.

Durante sus primeros quince meses en el poder (julio 1990-septiembre 1991), Fujimori ejerció mucho poder en la formulación de políticas públicas a diferencia de sus predecesores quienes se vieron por lo menos un tanto orillados por sus partidos políticos (o por otros líderes de sus partidos en sus gabinetes), Fujimori desatendió a su Cambio 90 el cual estaba integrado principalmente por representantes de grupos de empresarios pequeños y de comunidades evangélico protestantes, ambos faltos de experiencia política. Después de seis meses en el poder casi la totalidad de los miembros del gabinete eran políticos independientes que habían sido nombrados por el mismo Fujimori. Al mismo tiempo que se distanciaba de Cambio 90, Fujimori se aliaba a individuos cuyos vinculaciones políticas y sociales estaban en la fuerzas de seguridad.

Casi inmediatamente después de asumir el poder, Fujimori dio marcha atrás a las promesas populistas de su campaña.¹⁹ Con el fin de recibir el sello de aprobación del Fondo Monetario Internacional, Fujimori implementó un programa económico de “shock” que muchos analistas

¹⁵ Carrión (1996). No sólo muchos peruanos aprueban lo que Carrión denomina definiciones “plebiscitarias” de democracia, sino que encuestas informales en comunidades pobres en los años ochenta revelaron que más de la mitad de los encuestados definían la democracia como atención gubernamental hacia el pueblo y justicia social.

¹⁶ Resumen Semanal XV (abril 10-11 1992: 2) y Sí (mayo 11-17, 1992: 22). Uno de los mejores esfuerzos para entender esta aparente contradicción es Carrión (1996). Debe notarse también que, así como Velasco previamente, Fujimori justificó sus acciones como necesarias para alcanzar una democracia “real” en el largo plazo.

¹⁷ Ver Arias Quincot (1994); Planas (1992); Pease García (1995); Balbi (1998).

¹⁸ Rupturas constitucionales amenazaron sin éxito a Guatemala y Paraguay. En Haití, Aristide fue electo presidente en 1990 y derrocado en 1991. El ranking de los “derechos políticos” del Freedom House para 1992 fue 6 (solamente un punto por encima del ranking más bajo). Ver McColm (1992). Así como sus contrapartes basados en EE.UU., los analistas basados en Perú son críticos del gobierno de Fujimori sin catalogarlo como autoritario, ver Cotler (1994); Tanaka (1998); Granpone y Mejía (1995); y Tuesta Soldevilla (1996).

¹⁹ La descripción más clara sobre lo contundente que fué dicha reversión la presenta Stokes (1996: 62). Para una excelente cronología política en el período 1990-1992, ver, Pease García (1994).

consideraron era mucho más drástico que el que proponía Mario Vargas Llosa. Fujimori comprometió a su gobierno a pagar la deuda externa (al mismo tiempo que se buscaba la renegociación de sus términos), así como a estabilizar y liberalizar la economía. En el marco de lo que se denominó el Fuji-shock, se redujo radicalmente el gasto estatal, se flexibilizaron las leyes sobre inversión externa, se inició un programa de privatización, y se recortaron los aranceles. Así mismo--muy inusual para el gobierno de Fujimori--se creó diligentemente una nueva institución: la SUNAT (la Superintendencia Nacional para la Administración Tributaria), para dotar al Perú de una capacidad fiscal eficiente. Estas políticas resultaron siendo exitosas tanto para restaurarle al Perú las bendiciones de la comunidad financiera internacional, como para contener la hiperinflación (que había superado 7,000 por ciento en 1990), aunque la pobreza de corto plazo empeoró.

Fujimori también promovió políticas de contrainsurgencia y anti-narcóticos que eran contrarias a sus promesas de la campaña. Aunque durante la campaña las políticas de contrainsurgencia de Fujimori no fueron particularmente claras, se enfocaron más en el desarrollo económico alternativo de las comunidades. Sin embargo, una vez en el poder Fujimori promovió vigorosamente la creación de patrullas de auto-defensa (Rondas). Con respecto a los esfuerzos anti-narcóticos, en mayo de 1991 Fujimori firmó un acuerdo crucial con los Estados Unidos considerado mucho más de derecha que lo que había sido su postura durante la campaña.

)Cómo pudo Fujimori implementar estas políticas cuando Cambio 90 únicamente dominaba un cuarto de los escaños en la legislatura? En primer lugar, porque la coalición más importante del congreso, FREDEMO, apoyó la mayoría de las iniciativas de Fujimori, en particular sus políticas económicas. En segundo lugar, porque los partidos políticos que se suponía hubieran opuesto sus políticas estaban divididos. El APRA estaba desacreditado por los cinco años previos en el gobierno. Tanto el partido como Alan García fueron acusados de corrupción. Por su parte, la coalición marxista Izquierda Unida (IU) estaba fragmentada y en declive. En tercer lugar, algunos artículos de la constitución de 1979 le permitía al poder ejecutivo ejercer vastos poderes unilaterales en materia económica, así como emitir decretos sobre cualquier área de políticas públicas si la legislatura le delegaba la autoridad para hacerlo. Dicha autoridad fue delegada frecuentemente a los gobiernos de Belaúnde y García, así como a Fujimori.

A finales de 1991, no obstante, se incrementó la tensión entre el ejecutivo y el poder legislativo. En noviembre, cuando la autoridad legislativa de Fujimori estaba a punto de caducar, Fujimori emitió una avalancha de 126 decretos. De éstos, más de tres cuartos fueron aprobados, sin embargo, 28 decretos--la mayoría de los cuales eran medidas draconianas sobre temas de contrainsurgencia--fueron modificados o rechazados por la legislatura.²⁰ Los desacuerdos sobre el presupuesto para 1992 fueron intensos y el Ministro de Agricultura fue censurado por la Cámara de Diputados. Alan García terminó siendo exonerado por la Corte Suprema de Justicia de los cargos de enriquecimiento ilícito, y fue además reelecto secretario general del APRA. García buscaba unificar y galvanizar la oposición política contra Fujimori.

²⁰ Idéele 32-33 (diciembre 1991: 4-14); Idéele 34 (febrero 1992: 5-9).

Aunque para unos analistas estas acciones por parte del congreso peruano constituían obstrucción legislativa al ejecutivo y motivo suficiente para ser la explicación fundamental del autogolpe de abril de 1992, no lo fue así para la mayoría de analistas, incluyendo a la autora de este artículo.²¹ Los analistas que no consideran que la legislatura fue particularmente obstruccionista durante este período notan que mientras que si bien es cierto el congreso censuró a un ministro en veinte meses, sólo en el primer período de Belaúnde más de cincuenta oficiales de su gobierno fueron censurados. Estos analistas también enfatizan que hasta el momento del autogolpe los legisladores del FREDEMO buscaban forjar un acuerdo con Fujimori. Para estos analistas la razón fundamental del autogolpe fue la voluntad de Fujimori y de los militares. Fujimori era de una personalidad autoritaria que no quería perder su tiempo negociando con líderes opositores y que quería que su período presidencial se extendiera a más de cinco años (lo cual no era permitido por la constitución de 1979).²² Así mismo, los militares y los oficiales de inteligencia sostenían que para poder derrotar a Sendero Luminoso era necesario un régimen autoritario.²³

Si bien el autogolpe fue objeto de condena por parte de la mayoría de intelectuales y líderes políticos, casi el 80 por ciento de la población apoyó el suceso.²⁴ Ese apoyo no reflejaba la convicción de la población de que las políticas de Fujimori estuvieran dando resultados. Al contrario, las condiciones económicas y de seguridad eran peores que nunca. Aunque la hiperinflación había terminado, la pobreza crítica había incrementado y el Sendero Luminoso había ampliado dramáticamente su presencia en las ciudades del país, especialmente en Lima. Fujimori atribuía constantemente estos males al sistema político peruano. A lo largo de dos años, Fujimori acusó a líderes políticos, legisladores y jueces de ser corruptos, ineficientes y antidemocráticos. Había por supuesto una dosis de verdad en estas acusaciones, pero aún más importante era el hecho que dichas acusaciones inspiraban la esperanza de que un “simple” cambio de régimen político pondría fin a la pesadilla que era Perú.

III. EL GOBIERNO DE FUJIMORI DESDE EL AUTO-GOLPE DE 1992 HASTA LAS ELECCIONES DE 1995.

Los meses después del autogolpe fueron inestables y las consecuencias políticas del suceso eran inciertas. Sin embargo, Fujimori logró finalmente consolidar el poder en 1993 sobre la base de una nueva constitución diseñada por él mismo, y luego con su reelección por mayoría abrumadora en 1995, la que restauró sus credenciales democráticas ante la mayoría de actores de la comunidad internacional. A pesar de todo, para aquellos analistas peruanos y extranjeros que examinaron de cerca el proceso electoral, había inquietantes indicios sobre la disposición de Fujimori de manipular el procedimiento electoral a su favor, y de la incapacidad de los organismos de monitoreo electoral nacionales e internacionales de identificar las manipulaciones lo suficientemente rápido y de confrontar a Fujimori sobre las mismas.

²¹ El analista que avanzó el conflicto entre los dos poderes como la explicación más importante del autogolpe fué Kenney (1996: 75-104). Entre los que enfatizaron la voluntad política de Fujimori y el contexto estructural flexible están McClintock (1996: 53-74); Cameron (1998: 127); Stokes (1996: 63-69); y la gran mayoría de analistas peruanos.

²² Este punto es ampliamente explicado por McClintock (1996: 65-66).

²³ Ver particularmente Rospligiosi (1996).

²⁴ Resumen Semanal (abril 15-23, 1992: 1).

Si bien el autogolpe recibió el apoyo de la mayoría de peruanos, el hecho fue rechazado por muchos grupos internacionales. Luego de varias semanas de debate entre los numerosos actores relevantes, se arribó a un acuerdo cuando Fujimori se hizo presente en una reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) el 18 de mayo en las Bahamas. Por un lado, Fujimori acordó celebrar elecciones para elegir una asamblea constituyente dentro de un período de cinco meses, y la comunidad internacional acordó que el reingreso de Perú a la comunidad financiera internacional procedería sin contratiempos.

Aún así, quedaban obstáculos en el camino hacia la consolidación del poder de Fujimori bajo una nueva constitución diseñada por él. En primer lugar, la politización de la institución armada bajo la mirada cuidadosa de Vladimiro Montesinos y el general Nicolás Hermosa era rechazada por un importante sector de las fuerzas armadas. Bajo el liderazgo del general retirado Jaime Salinas Sedó, este sector intentó sin éxito un contragolpe. En segundo lugar, la población claramente esperaba ver resultados rápidos del autogolpe y Fujimori tenía que responder.²⁵ Empero, las ofensivas armadas del Sendero Luminoso incrementan en lugar de disminuir. En uno de los peores incidentes de la guerra, la explosión de un coche-bomba el 16 de julio de 1992 en Miraflores (uno de los barrios altos de Lima) dejó un saldo de veintiún muertos y 250 heridos. Muchos peruanos creían que la guerrilla estaba inexorablemente alcanzando su objetivo de asumir las riendas del estado por las armas. De igual manera y como resultado de la incertidumbre que causara el autogolpe, el PIB cayó en un 2.9 por ciento en 1992, y no cedían los altos niveles de pobreza.²⁶

La otra pregunta era si Fujimori mantendría su promesa de realizar elecciones que satisficieran los estándares de libertad y justicia que requerían la comunidad internacional y la oposición política doméstica. En las dos votaciones populares más importantes después del autogolpe, las maquinaciones del gobierno fueron numerosas. Para las elecciones de 1992 para elegir el Congreso Constituyente Democrático (CCD) que escribiría la nueva constitución peruana, Fujimori atrasó el establecimiento de las normas procesales y determinó que los miembros de la CCD no podrían optar a ser electos a cargos públicos hasta por lo menos un período después. Aunque la prohibición fue posteriormente revocada, esta ciertamente desanimó la participación de los líderes políticos establecidos. La mayoría de los partidos políticos más conocidos (APRA, AP y el Partido de Izquierda) se abstuvieron de participar, acusando a Fujimori de ser un autoritario que manipulaba las leyes. Pero hubo mucha confusión. Sólo las facciones disidentes de dichos partidos optaron por competir encontrando en su camino serios obstáculos legales para obtener el reconocimiento oficial necesario para lo que dedicaron gran parte del período electoral recogiendo las firmas de los votantes requeridas ante la ley. A pesar de todo esto, Fujimori sólo obtuvo una escasa mayoría de los escaños del CCD: 44 de 80.

Aún más dudas surgieron en cuanto a la imparcialidad del referéndum de octubre de 1993 sobre la constitución del CCD.²⁷ Los resultados del referéndum fueron inesperadamente reñidos--

²⁵ En junio de 1992, el porcentaje de peruanos que aprobara del autogolpe cayó al 41 por ciento--tan sólo la mitad de los que lo apoyaron inmediatamente después del hecho; ver *Latin American Weekly Report* 92 (julio 23, 1992: 12).

²⁶ Webb y Fernández Baca (1994: 369); y *Peru Report* VI (diciembre 1992: 1-3).

²⁷ Sobre lo anterior, ver, *Andean Report* XX (diciembre 20, 1993: 1-2) y el Latin American Studies Association (1995: 7-10).

52.2 por ciento para el “Sí” y 47.5 por ciento para el “No” en el conteo oficial--pero, a medida que se recibían en Lima reportajes provenientes de áreas remotas del país sobre los acontecimientos del día de la votación, analistas de oposición estimaban que el verdadero resultado apuntaba hacia una victoria para el “No.” En efecto, el conteo oficial del voto fue denunciado como fraudulento por un miembro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). La objeción principal era que en las remotas zonas de emergencia donde los comandantes militares representaban la autoridad máxima, estos distorsionaban tanto el procedimiento de votación como los resultados. Dicha manipulación militar del voto era lo que se creía explicaba el por qué los resultados oficiales en los departamentos de El Junín, Ayacucho, Pasco y Huancavélica fueron más favorables al “Sí” de lo que las encuestas habían anticipado.

Finalmente sin embargo, las maquinaciones perpetradas por el gobierno de Fujimori fueron toleradas tanto por la oposición doméstica como por la comunidad internacional. Para que los resultados de la votación hubieran sido repudiados, una coordinación más vigorosa hubiese sido necesaria entre la oposición doméstica y la comunidad internacional. Un repudio proveniente sólo de parte de uno de los dos no hubiese sido viable. Pero el liderazgo de la oposición política peruana no se unificó para emitir una declaración conjunta de fraude electoral, y la OEA (el principal organismo internacional que monitoreó ambas votaciones) aparentemente no encontró suficiente razón para cuestionar al gobierno sobre la validez del proceso.

Al mismo tiempo, el camino hacia la consolidación del poder de Fujimori sobre la base de una nueva constitución de su propio diseño fue adelantando. Esto se debió, en primer lugar, por los triunfos alcanzados en contra del Sendero Luminoso, y en segundo lugar por la recuperación económica. El septiembre de 1992, el Grupo Especial de Inteligencia (GEIN), un pequeño escuadrón elite de la policía antiterrorista que había sido creada durante el período presidencial de Alan García, capturó al líder de Sendero Luminoso, Abigael Guzmán. En las semanas siguientes, utilizando información encontrada en el escondite de Guzmán, la policía arrestó a más de mil presuntos Senderistas. Lo que hasta entonces había sido una ventaja psicológica de Sendero—su imagen de omnisciencia, omnipresencia y su invencibilidad frente a un estado corrupto e ineficiente—había sido repentinamente revocada. En los años subsiguientes, Sendero Luminoso fue finalmente derrotado.

A su vez, la paz política relativa ayudó a la economía peruana. En un contexto de estabilidad macroeconómica, la economía creció. El PIB real creció a una tasa anual de 6.4 en 1993 y 13.1 por ciento en 1994--la tasa de crecimiento más alta de la región.²⁸ El crecimiento fue particularmente robusto en aquellas áreas rurales donde se reanudaba la actividad económica convencional después de tantos años de violencia. El gobierno implementó un agresivo programa de privatizaciones y la inversión externa incrementó en forma dramática. Pero aún con todo esto, el beneficio principal de las nuevas políticas económicas para la mayoría de peruanos era la baja tasa de inflación (apenas 24 por ciento en 1994). Los indicadores en cuanto a ingresos reales, desempleo y pobreza registraban cambios positivos pero aún modestos dadas las condiciones críticas de finales de los años 80 y principios de los 90.²⁹ La superación por parte del gobierno de Fujimori tanto de la amenaza terrorista como de la crisis económica preparó el camino para la

²⁸ Banco Interamericano de Desarrollo (1997: 268-293).

²⁹ Banco Interamericano de Desarrollo (1997: 289); y Sheahan (1997: 7-38).

reelección del presidente en 1995. A diferencia de las contiendas de 1992 y 1993, la victoria del gobierno en abril de 1995 fué clara. Fujimori obtuvo un impresionante 64 por ciento de los votos válidos entre 14 candidatos--más del doble de lo que recibiera el candidato en el segundo lugar, y más que suficiente para evitar una segunda vuelta. Sin embargo, a pesar de la clara victoria de Fujimori en el voto presidencial, tanto las tácticas a que el gobierno recurrió en esa contienda como las severas anomalías que se dieron en la votación parlamentaria simultánea de 1995 levantó dudas sobre el apego gubernamental a las leyes electorales.

La victoria de Fujimori en la elección presidencial fué atribuible no sólo a sus logros en su primer período sino también al carácter deslucido del candidato principal de oposición, Javier Pérez de Cuéllar, que encabezaba el nuevo e “independiente” partido Unión por el Perú (UPP). Aunque ideológicamente diversos, importantes grupos de oposición esperaban que, como distinguido ex Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Pérez de Cuéllar sería un candidato presidencial en torno a quien podrían unificarse. Aparentemente la selección de Pérez de Cuéllar como candidato no fué influenciada indebidamente por injusticias del gobierno en como se conformó la arena política. De distintas formas sin embargo, Pérez de Cuéllar resultó siendo un candidato pobre. De 75 años de edad, caucásico y habiendo vivido la mayor parte de su vida en el extranjero, Pérez de Cuéllar no era un “presidente como tú” que interactuara fácilmente con la mayoría de los peruanos y que lograra persuadirlos que él sería capaz de afrontar los inmensos desafíos de gobernar el país. Así mismo, la posibilidad de que él sería un candidato unificador no se cristalizó. Si bien ex líderes del Partido Popular Cristiano, Acción Popular, Izquierda Unida y otros partidos se presentaron en las listas congresionales del UPP, el único partido establecido que apoyó a Pérez de Cuéllar en la elección presidencial fué el PPC. Finalmente, Pérez de Cuéllar recibió el 24 por ciento del voto válido.

Aunque es poco probable que alguna de las tácticas de Fujimori fuera necesaria para asegurar su victoria, su gobierno recurrió a acciones ilegales en contra de la oposición. Espionaje telefónico fué masivo, y fué utilizado incluso en contra de Pérez de Cuéllar. Si bien el personal militar no puede votar, dicha prohibición fué violada.

De igual manera, el gobierno utilizó recursos estatales de manera partidaria a niveles extraordinarios. De los varios miles de millones de dólares que entraron a las arcas del gobierno como resultado de la privatización, se destinó por lo menos \$875 millones--aproximadamente la mitad del ingreso proveniente de la privatización--para programas sociales y de inversión.³⁰ La tajada más grande de estos fondos fué manejada por el Ministerio de la Presidencia y el mismo Fujimori recorría constantemente las comunidades pobres--a menudo luciendo un poncho y sombreros andinos, éste se trasladaba en helicóptero a remotas comunidades campesinas--a iniciar nuevos proyectos, implícitamente a cambio del apoyo político de la comunidad.³¹ A la hora de responder encuestas sobre los principales logros del gobierno de Fujimori, la ciudadanía otorgaba a los esfuerzos contrainsurgentes el primer lugar, y el cuarto a la construcción de escuelas y mejoras a las carreteras.³²

³⁰ Roberts (1995: 104); Kay (1996-1997: 63-67).

³¹ En ese esfuerzo el gobierno de Fujimori elegía particularmente aquellos departamentos donde su apoyo había sido previamente débil. Ver Graham y Kane (1998: 67-105).

³² Webb y Fernández Baca (1997: 1149). La pregunta fué incluida en una encuesta de Apoyo en enero de 1997 a más de

No obstante, si bien fué claro que el electorado escogió a Fujimori como su presidente, no quedó para nada claro que estos escogieran a Cambio90/Nueva Mayoría como el partido mayoritario en el congreso. El Cuadro 1 sugiere la severidad de anomalías en la contienda. Un enorme 41 por ciento de las papeletas fueron nulas en la elección parlamentaria--más de cuatro veces el porcentaje en la elección presidencial de 1995 y más de tres veces los porcentajes en las votaciones presidenciales previas de 1990 y 1985. Los votos no validos fueron hasta el doble de los recibidos por Cambio90/Nueva mayoría. Personeros del gobierno atribuyeron el gran porcentaje de votos nulos a errores cometidos por los votantes en emitir el “voto preferencial” y a errores cometidos por los oficiales de mesas electorales en los cálculos aritméticos. Existe en efecto un consenso en que estos errores fueron comunes y que fueron exacerbados por la introducción del uso de la computadora. Aún así, el “voto preferencial” existía desde las votaciones de 1985 y 1990 sin darse serios problemas. Muchos líderes de oposición y algunos analistas sostienen que las papeletas de votación fueron anuladas ya sea en las mesas de votación ó por las computadoras. Cualquiera que sea la explicación, una elección en la cuál hay casi la mitad de papeletas nulas es una elección de dudosa validez.³³

El Cuadro 1 presenta otras anomalías ocurridas en la votación parlamentaria de 1995. Según los resultados oficiales, 835,964 peruanos votaron en la elección presidencial pero no en la contienda legislativa. Dado que las papeletas en blanco y las nulas fueron incluidas en los totales electorales y que ambas votaciones se realizaron en la misma papeleta, ¿como han de explicarse los votos “desaparecidos?” En las elecciones de 1985 y 1990, las tasas de abstencionismo fueron también más altas para la votación legislativa que para la presidencial, pero la votación se realizó en distintas papeletas, de manera que la discrepancia no era fuera de lo común. Posiblemente los oficiales de mesa fueron menos cuidadosos al no registrar algunas de las papeletas en blanco y las nulas--aunque dicha explicación incrementaría el porcentaje de votos invalidados. En todo caso, la anomalía es inquietante.

Cuestionamientos sobre los altos porcentajes de votos nulos y “desaparecidos” se intensificaron ya que los resultados de la contienda legislativa diferían en referencia a los resultados que habían sido proyectados por las encuestas de opinión. Dichas proyecciones sostenían que Cambio 90/Nueva Mayoría ganaría entre 25 y 35 por ciento del voto y 28 de los 120 escaños en el congreso, lo que contrastó marcadamente con el resultado oficial: 52 por ciento del voto válido y 67 escaños congresionales.³⁴

400 personas.

³³ En su capítulo en este volumen, Schmidt amplía sobre las explicaciones pro-gobierno en cuanto a las anomalías en las elecciones legislativas de 1995. Es imposible saber si las explicaciones del gobierno o las de la oposición tienen mayor validez (líderes de oposición expresaron en entrevistas que las organizaciones de monitoreo electoral trataron de realizar una buena labor pero que se enfocaron más en la contienda presidencial). Schmidt y yo coincidimos en que cuestionamientos sobre la validez de un proceso electoral no es el tipo de pregunta que debe quedar sin respuesta.

³⁴ Para las encuestas de opinión pública ver, Conaghan (1995: 9); Latin American Weekly Report 4 (febrero 2, 1995: 41); y Latin American Weekly Report 11 (marzo 23, 1995: 124).

IV. UNA EVALUACION DEL CARACTER DEMOCRATICO O AUTORITARIO DEL GOBIERNO DE FUJIMORI DURANTE SU SEGUNDO PERIODO.

Como se mencionó anteriormente, la tendencia entre los académicos y analistas basados en EE.UU. inmediatamente después de las elecciones de 1995 iba hacia la reincorporación del Perú a la clasificación de “democracia con adjetivo.” Sin embargo, la tendencia no sólo entre los académicos y analistas en el Perú, sino también entre la ciudadanía peruana, era en dirección opuesta--hacia la clasificación del gobierno como autoritario. Mientras que los analistas en Estados Unidos basaban sus posturas en la victoria clara de Fujimori en 1995, aquellos en Perú basaban sus juicios en una gran variedad de factores.

El Cuadro 2 muestra la caída dramática en el número de peruanos que percibieron al gobierno de Fujimori como democrático entre 1990 y 1998. El cuadro revela que a pesar de que en 1990 Sendero Luminoso fijaba de manera agresiva como blancos militares a sus adversarios políticos, un número mayor de peruanos expresó temor en emitir sus opiniones en 1998. De igual manera, más Limeños criticaron el proceso electoral como fraudulento en 1998 que en 1990— casi el doble.³⁵ En total, para 1998 la gran mayoría de Limeños--cerca del 80 por ciento-- caracterizaban a su país como poco democrático o no democrático, y en varias encuestas las mayorías catalogaban al gobierno de Fujimori no sólo como “autoritario” sino de hecho como “dictatorial.”³⁶

Un factor importante en las críticas cada vez más vehemente de los peruanos sobre el autoritarismo del gobierno era la sospecha creciente que la autoridad electa--Fujimori, por supuesto--no era la autoridad real en el país. Había quedado claro desde el autogolpe que ese personaje misterioso y rasputinesco llamado Vladimiro Montesinos, un capitán de la fuerza armada dado de baja y que fungía como jefe *de facto* del Servicio Nacional de Inteligencia (SIN), trabajaba muy de cerca de Fujimori. En 1997 las encuestas revelaron que la mayoría de peruanos consideraban a Montesinos más poderoso que Fujimori.³⁷ Fujimori viajaba tanto dentro y fuera del país que le parecía poco probable a muchos peruanos que éste pudiera administrar las responsabilidades cotidianas del gobierno. Así mismo, entre 1992 y 1998, el gobierno de Fujimori era un triunvirato en el que el presidente compartía el poder con Montesinos y con el jefe de las fuerzas armadas, General Nicolás Hermoza. No fue sino hasta en agosto de 1998 cuando finalmente Fujimori orilló a Hermoza a retirarse que quedó claro que el presidente gozaba de tal poder.

Probablemente el factor más importante sin embargo, fué la decisión de Fujimori de que él debería ser elegible para disputar su segunda reelección en el año 2000. La reacción masiva era que, cualquiera que fuera la interpretación correcta de la constitución, la búsqueda por parte de Fujimori de un tercer período violaba el espíritu de la ley e ignoraba la opinión ampliamente

³⁵ En 1996 el porcentaje de peruanos que criticaron las elecciones como fraudulentas fue 40 por ciento, por debajo del promedio regional; ver, PromPerú (1996: 5).

³⁶ Por ejemplo, en otra encuesta no citada por el Cuadro 2 y cuya metodología es desconocida, el 77 por ciento de los estudiantes en un muestreo de la Universidad de Lima en mayo-junio 1997 clasificaron al gobierno de Fujimori como una “dictadura” a diferencia del 16 por ciento que lo catalogaba como una “democracia.” Dicha encuesta fue reportada en el programa televisivo semanal Panorama (junio 15, 1997).

³⁷ Debate XIX (julio-agosto 1997: 13).

sostenida de que quince años consecutivos en la presidencia era demasiado tiempo. Las intenciones de Fujimori confirmaban las sospechas de que Fujimori no era un demócrata y que una de las motivaciones principales detrás de su autogolpe había sido la búsqueda de su reelección. De esta premisa fundamental emanan una serie de críticas acerca del terreno electoral previo a los comicios del 2000 y de las instituciones electorales.

La determinación sobre si la arena electoral y sus instituciones son justas, libres y niveladas resulta ser sumamente difícil. Un gran número de variables es relevante. No sólo son importantes los eventos sino también las percepciones. Para la mayoría de peruanos en 1998, sin embargo, la percepción era de que la arena electoral era, en efecto, “muy” sesgada. La población no podía precisar el límite entre un número aceptable de manipulaciones y lo inaceptable. Pero Fujimori lo había superado.

La estructura constitucional del Perú

Bajo las constituciones de 1979 y 1993, un poder ejecutivo con mayoría legislativa debía asumir vastos poderes. Podría argumentarse, como lo hace O'Donnell, que estas constituciones encajan en el modelo de “democracias delegativas.” Los poderes del presidente peruano sobre temas de políticas públicas, inmensos bajo ambas constituciones, sí parecen encajar en el modelo de O'Donnell. Sin embargo, en la constitución de 1993 pueden levantarse dudas sobre el intento deliberado de minar las instituciones democráticas que son necesarias para que haya competencia electoral libre, en particular los partidos políticos que tienen bases sociales fuertes. Ese intento podría irse separando de lo que es la democracia delegativa” hacia el autoritarismo.

Una innovación importante en la constitución de 1993 fue la provisión que permitía la reelección inmediata del presidente. Como se mencionó arriba, fue la interpretación del gobierno de Fujimori--que su elección en 1995 era la primera bajo esta constitución, y por consiguiente éste era elegible para ser reelecto en el año 2000--lo que intensificó las críticas sobre las tendencias autoritarias del presidente. Si bien la reelección se está tornando cada vez más común en Latinoamérica, varios problemas merecen mención. En un país donde el poder ejecutivo debe someterse a los frenos y equilibrios(*checks and balances*) por parte de otras instituciones políticas, la capacidad del presidente de concentrar el poder en sus manos o de sesgar el terreno electoral a su favor no debe ser desmedido. No obstante, en países como el Perú de los años 90 donde los *checks and balances* son escasos, la reelección fortalece dramáticamente la mano del presidente y le permite realizar acciones que sesgan el terreno electoral a su favor.

Las disposiciones que facilitan el establecimiento de nuevos o pequeños partidos tiende a exacerbar el problema de la falta de colaboración entre los líderes políticos del Perú, así como la sucesión del liderazgo al interior de los partidos. Si el líder tradicional de un partido no le cede el poder a un sucesor viable, es posible que éste se retire del partido y cree uno propio en vez de tratar de obtener el apoyo de las bases y forjar nuevos consensos. Algunas de éstas disposiciones son tradicionales en el Perú: por ejemplo, el uso desde 1950 del sistema de representación proporcional en lugar del sistema *the first- past-the- post*, y la introducción en 1963 de la fórmula D'Hondt para la representación proporcional sin límites de porcentaje que un partido debe obtener para tener representación. Como resultado de estos procedimientos electorales, un

partido con menos del 0.8 por ciento del voto válido obtuvo un escaño en el congreso 1995-2000. Sin embargo, más recientemente, en varias ocasiones el número de firmas requeridas en las peticiones para candidatos ha sido reducido, con el resultado de que en las elecciones municipales de 1993 por ejemplo, 38 candidatos compitieron por la alcaldía en Lima, y 77 en la relativamente pequeña ciudad de Huaura.³⁸ La innovación más importante en la constitución de 1993 en este sentido, es la sustitución del congreso bicameral--que incluía la Cámara de Diputados y el Senado en la cual los escaños de la primera eran repartidos sobre la base del número de votos de los departamentos--por una legislatura unicameral (Distrito Unico) repartida sobre la base del total de votos de la nación en su totalidad. Bajo este nuevo procedimiento, un partido político puede ganar un gran número de escaños como resultado de campañas publicitarias en ciudades grandes; ni la existencia de redes de grupos de base ni responsabilidad (accountability) a estas redes era necesaria.

La constitución de 1993 también redujo las oportunidades para que surgieran autoridades regionales para disputarle el poder a líderes nacionales. La constitución de 1993 terminó con los gobiernos regionales independientes los cuales habían sido establecidos tan sólo unos años atrás hacia finales del gobierno de Alan García.

La constitución de 1993 también incluía nuevas disposiciones que potencialmente conducían al establecimiento de la democracia en el Perú. Entre los más importantes se destacan la posibilidad de realizar referéndum sobre numerosas leyes de importancia, y el establecimiento de la oficina de la Defensoría del Pueblo. En 1998 sin embargo, cuando la mayoría de Cambio 90/Nueva Mayoría votó en contra de que la reelección de Fujimori podía ser sometida a un referéndum, era claro que el gobierno haría lo posible para impedir uso alguno de estas disposiciones que amenazara la posibilidad de que Fujimori continuara en el poder.

Los partidos políticos peruanos

Durante los años 90 los partidos políticos tradicionales del Perú “colapsaron.”³⁹ Ninguna de las coaliciones políticas o partidos que conformaba mayorías en el congreso peruano durante los 80 (APRA), Izquierda Unida o el Partido Popular Cristiano, lograron ni siquiera el cinco por ciento del voto válido en la contienda presidencial de 1995.⁴⁰ Entre 1980 y 1995, la tendencia de la población a alejarse de los partidos políticos “tradicionales” y acercarse a los candidatos “independientes” era más marcada en Perú que en cualquier otro país de la región.⁴¹ En la elección municipal de 1995 la gran mayoría de candidatos se autodenominaban “independientes” y

³⁸ Stokes (1996: 65-66). En otras ocasiones el número de firmas requeridas había sido aumentado (o el rigor con que se revisaban las firmas había incrementado).

³⁹ Colapsar” es una caracterización común de los académicos peruanos. Excelentes discusiones sobre el tema incluyen Tanaka (1997); Grabtree (1995).

⁴⁰ Webb y Fernández Baca (1997: 400). Debe notarse que algunos individuos que previamente habían representado la bandera de uno de estos partidos compitieron en 1995 como candidatos de la UPP. El Partido Popular Cristiano no compitió en la contienda presidencial y sólo obtuvo el 3.1 por ciento del voto parlamentario.

⁴¹ En varios índices de volatilidad electoral, el sistema partidario peruano resultó siendo el más volátil entre muchos países latinoamericanos; ver Mainwaring (1997: 21) (en un análisis de veinticinco países europeos y latinoamericanos) y Hartlyn (1995: 51) (en un análisis de siete países latinoamericanos). La volatilidad también era alta en Perú antes de 1980; ver, Coppedge(1995: 23).

el número de candidatos era tan grande que los totales electorales para todo el país carecían de sentido alguno y rara vez fueron hechas públicas.⁴²

Hubo varios motivos para el colapso de los partidos políticos peruanos. En primer lugar estaba, por supuesto, los resultados catastróficos de sus políticas durante la década de los 80, las cuales muchos peruanos atribuían a los partidos tradicionales” en el poder y a sus aliados. No ayudó mucho que los líderes claves de estos partidos no estaban en Perú y no podían ni querían defenderse. Alan García apenas alcanzó a eludir a las fuerzas de seguridad durante el autogolpe y logro establecerse en el exterior. Mario Vargas Llosa se trasladó a Europa. Y después de 1995, Pérez de Cuéllar también se ausentó por largos períodos en el exterior.

Resultó muy importante también que durante los años 90 Fujimori ridiculizó no sólo a los partidos políticos “tradicionales” sino que atacó también al concepto básico de un partido político. Fujimori contrastó a un liderazgo político vigoroso en nombre de la nación, con lo que él sostenía era el debate comprometido sin fin entre los miembros de los partidos políticos quienes únicamente buscaban su ventaja política o material.⁴³

De la misma manera, Fujimori no estaba dispuesto a convertir a su propio vehículo político, originalmente denominado Cambio 90 y luego rebautizado Cambio 90/Nueva Mayoría, en partido político. Los asesores principales de Fujimori no han pertenecido a su partido político sino a los cuerpos de seguridad o de inteligencia. Fujimori no estaba dispuesto a reclutar a líderes capaces para Cambio 90/Nueva Mayoría ni, de hecho, a reclutar a ningún líder. Por ejemplo, sólo unos cuantos candidatos se presentaron a las contiendas municipales de 1993 y 1996.

Sin embargo, ha sido importante que el gobierno de Fujimori ha aprovechado casi todas las oportunidades para impedir el surgimiento de nuevos líderes y de partidos de oposición. Como se menciona en la introducción a este capítulo el gobierno ha sido caracterizado a menudo de populista, y una propiedad clave del populismo es “movilización de arriba hacia abajo por líderes personalistas que evitan o subordinan formas institucionales de mediación política.”⁴⁴ De importancia particular para esta estrategia populista es la concentración de los recursos estatales en manos del ejecutivo. Por ejemplo, mientras en 1992 el Ministerio de la Presidencia asignaba el 3 por ciento del presupuesto nacional, esa proporción creció al 10 por ciento en 1995 y al 23 por ciento en 1996.⁴⁵ En 1997, el 3.6 por ciento del presupuesto del gobierno central era asignado a las municipalidades—comparado con aproximadamente, 25 por ciento en Chile, 20 por ciento en Bolivia, 14 por ciento en Colombia, 8 por ciento en Guatemala y 4 por ciento en México.⁴⁶ De igual forma, parecía que crecientemente el ejecutivo era capaz de canalizar recursos a alcaldes y a otros líderes políticos que apoyaban al ejecutivo y de retenerlos de aquellos que no.⁴⁷ El poder

⁴² Ver, por ejemplo Webb y Fernández Baca (1997: 396-398) donde aparecen únicamente los resultados de Lima.

⁴³ Un análisis sólido de la evaluación que Fujimori hacía de los partidos políticos en el Perú lo presenta Tanaka (1997: 40- 46)

⁴⁴ Roberts (1995: 84).

⁴⁵ Webb y Fernández Baca (1997: 928).

⁴⁶ The Peru Report, Vol. XII, No. 1 (junio 20, 1998), “Entrevista Política,” p. 3. Ver también, Idéele, No. 110 (agosto 1998: 8).

⁴⁷ Kay (1996- 1997: 74- 78); Isasi Cayo (1997: 217- 220); The Peru Report, (abril 20, 1998: 35); The Peru Report, (mayo 20, 1998: 1).

ejecutivo no sólo buscaba realzar su propio poder sino también limitar el poder de la oposición--un esfuerzo no contemplado en la “democracia delegativa” o en la “pseudo-democracia.” La agencia tributaria SUNAT inició procesos legales por evasión de impuestos en contra de varios líderes políticos de oposición y se le percibía no como una agencia tributaria sino como una agencia de acoso político.⁴⁸ Fiscales locales presentaban cargos en contra de alcaldes que parecían estar ganando presencia nacional, incluyendo por ejemplo al alcalde de Huancavélica, Federico Salas.⁴⁹

Aunque los partidos políticos en el Perú eran débiles, la sociedad civil aparentaba no serlo. Para 1996, el 53 por ciento de un muestreo nacional indicaba que participaban en ONGs--casi exactamente el mismo porcentaje que en Latinoamérica en su totalidad.⁵⁰ Así como en sus contrapartes regionales los peruanos participaban muy a menudo en organizaciones vecinales, clubes de deportes y organizaciones de la iglesia, pero rara vez en sindicatos o partidos políticos. La participación ciudadana en clubes de mujeres o de madres era mayor que el promedio regional.⁵¹ Pero en el mejor de los casos, no queda claro como las ONGs sin ninguna vinculación a los partidos políticos pueden--dadas las definiciones en este capítulo--atenuar el autoritarismo ó, a la inversa, promover la democratización.

En el contexto peruano de partidos políticos numerosos y fragmentados que en su mayoría no tienen vinculaciones significativas con organizaciones de base, resulta mucho más difícil el reclutamiento de candidatos de oposición viables para hacer frente a Fujimori. En otras palabras, la des-institucionalización implica una competencia política tristemente deficiente--y, sin competencia política, muchos académicos argumentan no existe democracia.

Los medios de comunicación

Por un lado, los medios de comunicación de oposición constituyen una fuerza vigorosa en el Perú. El semanario independiente tradicional Caretas y el periódico La República son publicados regularmente. En 1997 sectores de los medios de comunicación televisiva en general y Cesar Hildebrandt--periodista principal del canal trece--en particular, se convirtieron en las voces más importantes a favor de la democratización, brindando no sólo críticas regulares en contra de las acciones autoritarias del gobierno, sino también, un sentido de unidad entre los diversos sectores de oposición. En 1998 el programa de noticias de Hildebrandt se extendió a dos horas cada noche, y se repetía cada mañana por otras dos horas. Comentaba un politólogo en el Perú: César Hildebrandt es la oposición en el Perú.⁵² De cualquier manera desde 1996 el nivel de confianza de los peruanos al medio televisivo ha sido similar al de otros países latinoamericanos.⁵³

Por otro lado, los medios de comunicación de oposición eran una fuerza vigorosa *a pesar*

⁴⁸ Conaghan (1995: 8); Conaghan (1998).

⁴⁹ Federico Salas era uno de varios alcaldes que acusaban el gobierno de Fujimori de orquestar investigaciones legales e incluso ataques físicos en contra de ellos; Hildebrandt (junio 8, 1998).

⁵⁰ PromPerú (1996: 24).

⁵¹ Idem.

⁵² McClintock (1998).

⁵³ PromPerú (1997: 3).

de los esfuerzos del gobierno de intimidarlos y reprimirlos, por medio de demandas legales, investigaciones fiscales y aún ataques violentos. Esto fue particularmente evidente cuando el gobierno clausuró los reportajes investigativos críticos del Canal 2 (reportajes que revelaban entre otras cosas que Montesinos recibía como salario más de 100,000 dólares al mes) al revocar la ciudadanía peruana del accionista principal Baruch Ivcher. Una orden de arresto fue emitida en contra de Ivcher, quien ahora vive en el exilio. Hildebrandt declara constantemente que es blanco de intentos de asesinato y de otros esfuerzos de intimidación. Otros periodistas han alegado lo mismo y crecientemente estos periodistas reciben el apoyo de las instituciones que representan.

Tal y como Conaghan lo ha mencionado, a los medios de comunicación peruana también se les niegan grandes cantidades de información por parte del gobierno.⁵⁴ Este es un tema importante que no recibe la atención debida.

Instituciones electorales

Mientras O'Donnell visualiza la celebración de elecciones limpias a pesar del poder que el ejecutivo ejerce sobre la legislatura y el poder judicial, en muchos países latinoamericanos el poder judicial en particular juega un papel importante en el establecimiento de instituciones electorales, y existe duda que bajo el dominio del gobierno de Fujimori estas instituciones puedan funcionar de manera justa.

El autogolpe le permitió a Fujimori purgar a muchos jueces corruptos. Especialmente a jueces Apristas que habían sido nombrados bajo el gobierno de García. Pero la mayoría de los nuevos nombramientos judiciales eran "provisionales" en lugar de permanentes.

En otras palabras, los nombramientos de estos jueces eran sujetos a renovación, y la renovación era sujeta a la aprobación del triunvirato gobernante. Hasta junio de 1998 aproximadamente el 40 por ciento de los jueces incluyendo los de la Corte Suprema de Justicia eran provisionales.⁵⁵ Cuando el gobierno de Fujimori percibía la amenaza de una decisión judicial--lo cual desde 1997 ha significado principalmente una decisión en contra de la elegibilidad de Fujimori para competir en las elecciones del año 2000--el gobierno ha tomado posturas hostiles. En particular, cuando en 1997 el Tribunal Constitucional (la institución judicial que determina la constitucionalidad de las leyes) no falló a favor de la interpretación hecha por Cambio 90/Nueva Mayoría de la constitución de 1993 en la que le permitiría a Fujimori buscar la reelección, el gobierno mutiló al Tribunal. Además, en el preludio y las secuelas de la decisión no favorable del tribunal, el presidente del tribunal fue objeto de un ataque sospechoso. Una de las jueces opositoras y su esposa fueron además objeto de una investigación fiscal.⁵⁶ El gobierno de Fujimori también buscó que los miembros de las instituciones electorales--muchos de los cuales eran electos principalmente por las instituciones judiciales-- fueran lo más adepto posibles a Cambio 90/Nueva Mayoría.⁵⁷ Mientras que en la constitución de 1979 el Jurado Nacional de

⁵⁴ Conaghan (1998: 6-7).

⁵⁵ Entrevista con Sergio Salas, Juez de la Corte Superior de Lima y con un representante del Jurado Nacional de Elecciones, junio 16 1998. Ver también data en Idéele, No. 106 (abril 1998: 11).

⁵⁶ Conaghan (1998: 6-7).

⁵⁷ The Peru Report (marzo 19 1998: 3). Idéele, No. 106 (abril 1998: 8-11).

Elecciones era la única institución responsable que velara por el proceso electoral, bajo la constitución de 1993 tres instituciones compartían la responsabilidad: el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). De los cinco miembros de la JNE, uno es nombrado por la Corte Suprema, uno por la Junta de Fiscales Supremos, uno por el Colegio de Abogados, uno por los decanos de las facultades de derecho de universidades públicas y uno por las facultades de derecho de universidades privadas. Los jefes del ONPE y el RENIEC fueron seleccionados por el Consejo Nacional de Magistratura, una institución que nombra jueces y fiscales seleccionados a su vez por un grupo de instituciones similares a las que eligen a la JNE. El gobierno buscaba asegurarse que los nombramientos le resultaran favorables mediante diversas modalidades, como por ejemplo, potenciando a los jueces provisionales para poder votar y establecer nuevas facultades de derecho en distintas partes del país en donde los decanos y los docentes pudieran ser influenciados, así como también con decretos parlamentarios que le diera al ejecutivo más poder en estas decisiones.⁵⁸

V. ELECCIONES EN VARIOS REGIMENES AUTORITARIOS DEL SIGLO XX

Tal vez contrario a las percepciones americanas actuales, han habido muchas elecciones latinoamericanas que no han culminado en la clasificación del régimen subsecuente como democrático. Para un número considerable de países latinoamericanos, se hizo lo suficientemente claro, por lo menos en retrospectiva—que la oposición no tenía ninguna oportunidad de ganar la elección y que el gobierno debía considerarse autoritario. En efecto, cuando se han celebrado elecciones pero no ha competido ningún partido de oposición, rara vez el gobierno titular ha alcanzado tan siquiera mención de no autoritario. Cuando se celebran elecciones y participan algunos grupos de oposición, la contienda a menudo realza la imagen del gobierno titular por un tiempo, por lo menos entre oficiales del gobierno de EE.UU., pero no para el registro histórico de los analistas. A la hora de la elección, sin embargo, el hecho de que ocurren plantea importantes dilemas para los partidos de oposición.

Para regímenes militares en donde las elecciones no son disputadas por partidos de oposición, no ha quedado mucha duda en cuanto a la aplicabilidad de la clasificación de autoritaria. Un ejemplo de esto en el Perú fue el general Manuel Odría (1948-1956), quien buscaba una imagen de demócrata y celebró elecciones en 1950. Aparentemente sin embargo, el no esperaba que surgiera una oposición significativa. Cuando la candidatura del general Ernesto Montagne fue presentada por una coalición política llamada la Liga Nacional Democrática, Odría animó al Jurado Nacional de Elecciones a invalidar la candidatura de Montagne, lo cual logró. Las acciones de Odría produjo una protesta en Arequipa la cual fue sofocada y Montagne fue deportado. La única oposición a Odría en la “elección” fue de parte del pequeño Partido Socialista que finalmente logró algunos escaños en el congreso. No debe sorprendernos que esta “elección” no le otorgó a Odría la imagen democrática que buscaba.⁵⁹

Aún entre regímenes civiles que celebran elecciones, la consideración de una etiqueta no

⁵⁸ Conaghan (1995: 7-8); y Conaghan (1998).

⁵⁹ Para una perspectiva periodística, ver *New York Times* (abril 16, 1955: 18) ; y *New York Times* (abril 14, 1955: 12). Para una perspectiva académica, ver Tamariz: 1995: 300-301); Werlich (1978: 250); y Collier (1976: 11).

autoritaria es poco probable si los partidos de oposición no participan. De nuevo, Perú ofrece un ejemplo: el gobierno de Augusto Leguía (1919-1930). En 1919, Leguía enfrentaba varios obstáculos para su gobierno y realizó lo que ahora podría denominarse el primer autogolpe del Perú. Leguía enmendó la constitución para poder ser reelecto en 1924 y de nuevo en 1929. Se celebraron elecciones pero no participó ningún partido político. Periódicamente Leguía detenía periodistas y reprimía a los sindicatos y a militantes del movimiento estudiantil. Afortunadamente para Leguía el crecimiento económico global era sostenido. Préstamos de bancos americanos y grandes inversiones americanas facilitaban la construcción de ambiciosas obras públicas y la implementación de varias reformas socioeconómicas. Sin embargo, sin oposición alguna la celebración de elecciones no lograba atenuar la imagen del gobierno de autoritario.⁶⁰

No obstante, cuando compiten grupos opositores significativos la aplicabilidad de una clasificación no autoritaria se convierte en un verdadero dilema aún para regímenes militares que en retrospectiva fueron descaradamente autoritarios, la celebración de elecciones en las cuales participan grupos de oposición aparentemente realzan la imagen del régimen por un período de tiempo. Ejemplos de esto incluyen Nicaragua bajo la dinastía Somoza y Paraguay bajo Stroessner (quien tomara posesión en 1954, y permitiera alguna competencia electoral entre 1962 y 1989).⁶¹

En Nicaragua la decisión en torno a la participación electoral dividió al partido de oposición, el partido conservador, desde un comienzo de la campaña electoral de 1936. Comenta Knut Walter: “siempre había conservadores dispuestos a jugar política con los liberales Somocistas.”⁶² En particular entre 1945 y 1948 el gobierno americano ejerció presión sobre Anastasio Somoza para que permitiera elecciones verdaderamente democráticas. En el marco de serios disturbios políticos luego de elecciones fraudulentas, la firma de un acuerdo político entre liberales y una fracción de los conservadores fue crucial para la continuación de la hegemonía Somocista.⁶³

En Paraguay, el partido principal de oposición, el partido liberal se dividió en dos facciones sobre el tema en 1963, y hubo varias divisiones en otros partidos. Los grupos que participaron en el esquema de Stroessner justificaron su decisión basándose principalmente en que sus críticas del régimen, aunque fueran apagadas, iba a promover la democratización en el largo plazo. Mientras que los grupos que se abstendían acusaban a los que participaban de haber optado por la vida fácil de un partido tolerante mientras que ellos continuaban enfrentando valientemente las realidades del régimen y su represión.⁶⁴ Aunque las elecciones en Paraguay no persuadieron a los periodistas de que el país era democrático, si lograron realzar el apoyo internacional para el régimen, particularmente apoyo americano.⁶⁵ En efecto, Stroessner aparentemente buscó la

⁶⁰ Tamariz (1995: 175 - 183); Werlich (19978: 155- 156).

⁶¹ Otros ejemplos incluyen Brasil entre 1964 y 1985 y El Salvador entre 1932 y 1980.

⁶² Walter (1993: 98).

⁶³ Walter (1993: 144- 175).

⁶⁴ Lewis (1980: 182- 185); ver también Miranda (1990: 76- 100).

⁶⁵ Para las perspectivas periodísticas, ver New York Times (enero 5, 1963: 4); New York Times (febrero 18, 1963: 8); New York Times (agosto 16, 1993: 7); New York Times (febrero 5, 1983: 2); y New York Times (agosto 15, 1983: 19). Sobre el éxito de la estrategia de Stroessner en lograr apoyo internacional--o por lo menos reducir la oposición--ver Lambert (1997: 13) y McDonald and Ruhl (1989: 71).

participación de un grupo opositor en 1963 como resultado de una preocupación americana sobre la democracia expresada por el presidente Kennedy en la Alianza para el Progreso.⁶⁶

Tal vez los casos más similares a Perú bajo Fujimori sin embargo, son los países cuyos gobiernos son liderados por civiles, donde se celebran elecciones y donde participan grupos opositores, y donde la etiqueta apropiada del régimen fuera intensamente controversial, tendiendo hacia una mayor aplicabilidad de la clasificación autoritaria a medida que pasaba el tiempo. Los ejemplos más importantes son México bajo la hegemonía del PRI y República Dominicana bajo Balaguer (entre 1966 y 1978).

Hasta hace poco, México bajo el PRI era ampliamente tildado por los académicos como un régimen autoritario.⁶⁷ En los círculos gubernamentales americanos sin embargo, el régimen Mexicano fue considerado por muchos años como *sui generis*; pero a medida que surgiera el debate sobre NAFTA, el régimen fue incluido dentro del grupo democrático por los gobiernos de Bush y Clinton. Durante la mayor parte del período de la hegemonía del PRI (aproximadamente desde 1934 hasta 1994), había una oposición política legal que funcionaba y participaba en la mayoría de las contiendas electorales: el PAN (Partido Acción Nacional). Aunque el partido usualmente optaba por competir en las elecciones, la decisión era a su vez bastante divisoria.⁶⁸ Hasta que punto la participación del PAN creó lo que Kenneth F. Johnson llama "el dilema central" del PAN: mediante la aceptación de un rol participativo como la oposición principal del PRI se contribuye a la fachada de democracia la cual el PRI desea perpetuar.⁶⁹

En la República Dominicana, el gobierno de Joaquín Balaguer (1966-1978) es considerado casi universalmente por académicos recientes como autoritario.⁷⁰ Entre 1966 y 1970, hubieron cerca de 650 muertes o desapariciones políticas. Balaguer concentró el poder político en el ejecutivo y utilizó recursos estatales para fines partidarios.⁷¹ Su estrategia hacia la oposición fue criticada por ser corruptora hacia arriba y represora hacia abajo.⁷² Sin embargo, Balaguer era un líder civil, se celebraban elecciones, y la constitución no había pasado al olvido. Así mismo, su gobierno no era tildado de autoritario, ni por el gobierno de EE.UU. ni por los medios de comunicación americanos.⁷³ Para el partido de oposición principal, el PRD (Partido Revolucionario Dominicano), el régimen de Balaguer provocó serias confusiones y divisiones. Durante muchos años, el partido fue liderado por Juan Bosch, quien era considerado por los EE.UU. como un izquierdista peligroso. Bosch había dejado la República Dominicana en 1966 y retornado apenas antes de las elecciones de 1970. El partido se abstuvo de participar en las elecciones, pero no hizo una buena labor explicando su decisión a la comunidad internacional. Para las elecciones de 1974, una mayoría de líderes del PRD querían participar lo que condujo y Bosch a romper con el partido. Durante varios meses, varios líderes del PRD forjaron alianzas e

⁶⁶ Lewis (1980: 182).

⁶⁷ Purcell (1973) y Middlebrook (1995), entre muchos otros.

⁶⁸ Johnson (1978: 140- 149).

⁶⁹ Johnson (1978: 145).

⁷⁰ Ver por ejemplo, Hartlyn (1998).

⁷¹ Hartlyn (1998: 110).

⁷² Hartlyn (1998: 115).

⁷³ Hartlyn (1998: 100); New York Times (febrero 26, 1970: 7); New York Times (abril 2, 1970: 12); New York Times (abril 19, 1970: 38); New York Times (abril 14, 1974: 13); New York Times (abril 17 1974: 7).

hicieron campaña, pero se retiraron dos días antes de la elección alegando temores de un enfrentamiento sangriento. Una vez más, plagados tanto por la imagen de ser un partido de izquierda, como por sus propios conflictos sobre el dilema de la participación, el PRD fue incapaz de persuadir a los Estados Unidos de que abstenerse a participar era la decisión sensible.⁷⁴

Deben los partidos de oposición participar en procesos electorales en los cuales existe una gran posibilidad de que sean manipulados por los gobiernos titulares? Las ventajas de participar son varias: 1) la posibilidad de que a pesar de los mejores esfuerzos del régimen autoritario, éste no pueda imponerse sobre el electorado en un proceso que es descaradamente fraudulento y sea denunciado tanto adentro como afuera del país; 2) la oportunidad realzada de tener una voz política, una presencia y aprendizaje--aún si las elecciones son fraudulentas y/o si la oposición pierde de manera desmedida; y 3) especialmente en casos donde hay elecciones parlamentarias y/o regionales celebrándose simultáneamente, las oportunidades de que políticos puedan asegurar un cargo público cualquiera que sea el resultado presidencial.

También es importante que frecuentemente, los líderes y partidos de oposición no pueden unificar sus posturas. Si unos grupos políticos participan pero otros no, el peor de los casos es el más probable: que a la oposición le vaya mal mientras el régimen termina no siendo claramente repudiado. Este escenario es el que ocurrió en Perú para la elección del Congreso Constituyente Democrático (CCD) (ver sección III).

De igual manera, la oposición sabe que ningún régimen es permanente. Los regímenes autoritarios pasan a ser más democráticos por varias razones. Entre las más importantes están: 1) demandas populares para la transición; 2) el desgaste del liderazgo y las nuevas demandas democráticas de entre los líderes; y 3) presión internacional. La posibilidad--pero no la certeza--de otra transición democrática presenta serios dilemas para la oposición política, especialmente durante períodos electorales.

Sin embargo, también hay desventajas para la oposición en cuanto a la decisión de boicotear la elección. Una de ellas es la señal inequívoca que se envía, particularmente a la comunidad internacional de que las posibilidades son escasas de que la votación sea libre y justa y que el régimen es verdaderamente autoritario. Es interesante recordar que los EE.UU. animó a los partidos de oposición a boicotear las elecciones en Nicaragua en 1984, presumiblemente para que las elecciones fueran criticadas.

La segunda es para que la oposición no sea percibida que está jugándole el juego al régimen autoritario sólo para su propio beneficio--que no sea percibido en el largo plazo como cooptada. La decisión de un partido de oposición de competir puede ser juzgada, tanto por los disidentes como por otros, como un indicador de su disposición de “negociar su integridad por unos cuantos escaños en el congreso.”⁷⁵

⁷⁴ Hartlyn (1998: 117).

⁷⁵ Para comentario sobre la oposición en Paraguay; ver Lewis (1980: 185).

VI. FACTORES INTERNACIONALES Y LA OPOSICION POLITICA EN EL PERU

Desde los años 80, la democratización ha sido un tema de interés para Estados Unidos en Latinoamérica. Sin embargo, la democratización no parece haber llegado al ápice de la agenda americana para la región en general, y para Perú en particular. Los temas económicos y, en algunos países, el esfuerzo anti-drogas parecen ser más importantes. Como un indicador de las prioridades americanas, cabe notar que la ayuda americana para Perú fue escasa durante el gobierno de García--que tenía diferencias con EE.UU. en temas económicos y que era una democracia electoral; pero relativamente generosa hacia el gobierno de Fujimori--el cual ha adoptado políticas económicas y anti-narcóticos convergentes con las preferencias americanas a pesar de tener credenciales democráticas dudosas.⁷⁶

Como se indicó en las primeras dos secciones de este capítulo, las instituciones de monitoreo electoral establecidas por la comunidad internacional estuvieron silenciosas sobre las deficiencias en el referéndum de 1993 y las elecciones entre 1992 y 1995. No es claro si su bajo perfil fue el resultado de la astucia de Fujimori y de la dificultad en detectar problemas, o de reticencia a criticar. Lo que sí es claro, es que estas instituciones no han sido tan críticas como los peruanos sobre los problemas electorales recientes.

A medida que se aproximan las elecciones del año 2000 y se intensifica la polarización en torno al tema de la reelección de Fujimori, ¿pondrá la administración Clinton los temas de democracia a un nivel más alto en la agenda bilateral? Posiblemente. Por un lado, el Departamento de Estado está obviamente al tanto de las tendencias autoritarias de Fujimori. El embajador americano en el Perú (1996-1999) Dennis Jett ha criticado frecuentemente las medidas autoritarias de Fujimori, en particular aquellas en contra del poder judicial que afectan la posibilidad de que haya elecciones libres y justas y la reciente decisión en contra el referéndum. Por otro lado, la comunidad financiera internacional, la agencia anti-narcóticos (DEA) y probablemente la Agencia Central de Inteligencia (CIA) están satisfechos con el desempeño del gobierno de Fujimori en sus respectivas áreas de interés. Los líderes de estas agencias prefieren no obstruir a Fujimori., particularmente cuando no ven el surgimiento de un líder de oposición peruana que avance las iniciativas de política preferidas por los EE.UU.

Además, la administración Clinton tiene poco que ganar al anunciar que Perú se ha deslizado del grupo democrático. Es más fácil para la administración hablar de “pasos hacia adelante” y pasos hacia atrás.” No hay motivo porque esperar que la administración Clinton juzgue al gobierno de Fujimori como autoritario a no ser que los peruanos--la ciudadanía y partidos políticos--envíen un mensaje claro que ellos consideran que su gobierno es autoritario y que duden en cuanto a lo libre y justas que serán las elecciones del 2000 y decidan no participar. Se necesita que la comunidad internacional y la oposición política peruana adopten mediadas en concierto para poder lograr mayor efectividad. Esto sin embargo, parece poco probable.

⁷⁶ El Departamento de Estado adoptó una medida dura en contra del autogolpe pero ese no fue el caso para el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, ver Stokes (1996: 65). Así mismo, no es claro que las otras agencias estadounidenses compartían la postura del Departamento de Estado.

VII. CONCLUSION

El argumento de este capítulo es que los académicos deben reevaluar nuestra tendencia de juzgar un régimen que permite la participación de partidos de oposición en una “democracia con adjetivos” y considere revivir la etiqueta de autoritario para aquellos países en donde las elecciones no son lo suficientes libres o justas y/o el terreno electoral no sea suficientemente nivelado.

El problema que confrontan los académicos por supuesto es el establecimiento de límites para el grupo de condiciones relevantes para la determinación de si las elecciones son suficientemente libre y justas, o si el terreno electoral es lo suficientemente nivelado. En este capítulo, se enfatiza la dificultad en establecer los límites para estos criterios. Hasta cierto punto, la evaluación descansará en una valoración subjetiva de la voluntad del presidente de aplacar una victoria de la oposición cueste lo que cueste.” Históricamente, la comunidad internacional se ha aprovechado de las dificultades en las valorizaciones subjetivas para juzgar como limpia la victoria del partido que prefiere y fraudulenta la victoria del partido que no prefiere. En mi opinión sin embargo, la clasificación apropiada para el Perú (1995-al presente) es de autoritaria y no una democracia delegativa, una pseudo-democracia o una democracia con cualquier otro objetivo. Un criterio fundamental para mi estimación es la evaluación de los propios peruanos de que el terreno electoral para las elecciones presidenciales del año 2000 es sesgado y que muy probablemente las elecciones serán fraudulentas. Los peruanos basan sus evaluaciones en sus percepciones de la voluntad política del presidente Fujimori y no en cualquier precedente específico. Es importante mencionar en este sentido que no ha habido un líder latinoamericano que haya sido responsable por la ruptura democrática de un país que se convierta luego en el presidente de un primer gobierno en su próxima ola democrática.

Generalmente la oposición peruana comparte la visión de que el gobierno de Fujimori es autoritario y que tratará de sesgar las elecciones del año 2000 tanto como sea necesario para que Cambio 90/Nueva Mayoría gane. Sin embargo, por lo menos hasta ahora la oposición no ha adoptado la postura de boicotear la elección. Esto es entendible en el contexto peruano que si bien es autoritario, es también volátil y donde quedan muchos cuestionamientos (incluyendo la misma candidatura de Fujimori para el 2000)--y también donde elecciones parlamentarias se celebran simultáneamente.⁷⁷ La historia reciente sugiere, sin embargo, que es poco probable que la comunidad internacional juzgue la contienda del 2000 como fraudulenta y a un Fujimori post-2000 como antidemocrático a no ser que los mismos partidos de oposición peruanos claramente indiquen su opinión respecto al terreno electoral mediante su decisión de no participar.

Es posible por muchas razones que Fujimori sea reelecto en el año 2000, pero si las evaluaciones de los peruanos en cuanto al terreno electoral y a las instituciones electorales perduran, un gobierno Fujimori post-2000 no sería considerado democrático o legítimo por la mayoría de la ciudadanía. Este es un escenario potencialmente explosivo.

⁷⁷ Es posible que una de las razones por las cuales Fujimori no ha declarado su candidatura es para incrementar la incertidumbre que confronta a sus adversarios políticos a medida que se preparan para las elecciones del 2000.

Cuadro 1

LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS DE 1995 EN CONTEXTO COMPARATIVO

VOTOS NULOS, 1990-1995
(porcentajes)

	1990 ¹ (Presidenciales)	1990 (Diputados) ²	1992 (CCD)	1993 (Referéndum)	1995 (Presidenciales)	1995 (Congreso)
Votos Nulos ³	7.2	13.5	19.7	6.3	8.7	40.8

*NUMERO DE VOTOS EN LA CONTIENDA LEGISLATIVA Y PRESIDENCIAL, 1995*Los “votos desaparecidos”

1. Total de votos emitidos en la contienda presidencial	9,069,644
2. Total de votos emitidos en la contienda legislativa	8,233,680

Votos a favor de Cambio 90/Nueva Mayoría y votos no válidos

1. Total de votos emitidos para Cambio 90/Nueva Mayoría en la contienda presidencial	4,798,680
2. Total de votos emitidos para Cambio 90/Nueva Mayoría en la contienda legislativa	2,277,423
3. Total de votos no válidos en la contienda legislativa (votos nulos y en blanco)	5,956,257

Fuentes: Tuesta Soldevilla (1994) para los resultados pre-1995; y Webb y Fernández Baca (1996: 399-400) para los resultados de 1995.

¹ Primera vuelta. El número de votos no válidos y la tasa de abstencionismo fueron ligeramente menor en la segunda vuelta.

² Tanto el número de votos no válidos como la tasa de absentismo fueron mayores para diputados que para senadores.

³ Como porcentaje del total de votos emitidos.

Cuadro 2

EVALUACION CIUDADANA DE LA DEMOCRACIA EN EL PERU
(porcentajes)

	Lima, 1990 (N=400)	Lima, 1998 (N=519)	Huancayo, 1998 (N=25)
1. Existe temor en las expresiones de opinión. ¹	62	77	76
2. Las elecciones en el Perú son fraudulentas. ²	32	64	72
3. La intervención militar en la política peruana es excesiva. ³	N/A	50	64
4. Hoy en día Perú es poco democrático ó no lo es para nada. ⁴	59	80	84
5. El gobierno del Presidente Alberto Fujimori es dictatorial (en lugar de democrático). ⁵	N/A	72	N/A

Fuentes: Datum (1990); Apoyo (1998); para Huancayo, encuesta informal entre sujetos predominantemente de clase media, Osoros (1998).

¹ Pregunta: “¿Existe temor en el Perú en las expresiones de opinión, ó libertad?”

² Pregunta en 1990: “Durante los últimos diez años mas o menos, han habido varias elecciones en el Perú. En términos generales, ¿cree usted que esas elecciones han sido fraudulentas y/o inaccesibles para todos? O, ¿han sido estas justas, libres y accesibles para todos? La pregunta para 1998 omite la dimensión de accesibilidad pero se incluye en el estudio de Latinobarómetro (N=1054 urbano de todo el país, no sólo Lima). En Huancayo, la pregunta se refería a las expectativas para los comicios del año 2000.

³ Pregunta: “¿Cree usted que la intervención de los militares en la política peruana es excesiva, suficiente, o mínima?”

⁴ Pregunta: “¿Que tan democrático cree usted que es Perú ahora? Mucho, considerablemente, sólo un poquito, ó para nada?”

⁵ Pregunta hecha en “distintas ciudades” por la Empresa internacional Peruana de Investigación de Mercado, citada en La República, septiembre 6, 1998, p. 3.

BIBLIOGRAFIA

Balbi, Carmen Rosa: "Permanencia y Cambios en la Política Social Peruana en un Contexto de Democracia Autoritaria," Paper presented at the Latin American Studies Association meeting, September 1998.

Cameron, Maxwell A.: "Self-Coups: Peru, Guatemala, and Russia," Journal of Democracy, Vol. 9 (January 1998).

Cameron, Maxwell A. y Philip Mauceri: The Peruvian Labyrinth. Pennsylvania State University Press, University Park, PA, 1997.

Carrión, Julio F.: "Explaining Mass Support for Anti-Democratic Actions: The Case of Fujimori's Auto-Coup in Peru." Paper submitted to Comparative Political Studies, May 1996.

Collier, David: Squatters and Oligarchs: Authoritarian Rule and Policy Change in Peru. Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1976.

Collier, David y Steven Levitsky: "Democracy with Adjectives: Conceptual Innovation in Comparative Research," World Politics Vol. 49 (April 1997): 430-451.

Conaghan, Catherine: "The Permanent Coup: Peru's Road to Presidential Reelection," LASA Forum, Vol. XXIX, No. 1 (spring 1998).

Conaghan, Catherine: "Troubled Accounting, Troubling Questions: Looking Back at Peru's Election," LASA Forum, Vol. XXVI (Summer 1995).

Coppedge, Michael: "Freezing in the Tropics: Explaining Party System Volatility in Latin America," Paper presented at the Midwest Political Science Association meeting, April 1995.

Cotler, Julio (ed.): Política y Sociedad en el Perú: Cambios y Continuidades. Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 1994.

Crabtree, John: "The 1995 Elections in Peru: End of the Line for the Party System," Institute of Latin American Studies Occasional Paper No. 12, University of London, 1995.

Diamond, Larry: "Is the Third Wave Over?" Journal of Democracy Vol. 7 (July 1996): 21-25.

Diamond, Larry, Juan J. Linz, y Seymour Martin Lipset (eds.): Democracy in Developing Countries: Latin America. Lynne Rienner, Boulder, 1989.

Epstein, Edward C.: "Participation by the Poor in Government Anti-Poverty Programs: The Cases of Chile, Peru, and Argentina Compared." Paper presented at the Latin American Studies Association meeting, September 1998.

Graham, Carol y Cheikh Kane: "Opportunistic Government or Sustaining Reform? Electoral Trends and Public-Expenditure Patterns in Peru, 1990-1995," Latin American Research Review, Vol. 33 (1998): 67-105.

Grompone, Romeo y Carlos Mejía: *Nuevos Tiempos, Nueva Política*. Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 1995.

Hartlyn, Jonathan: The Struggle for Democratic Politics in the Dominican Republic. University of North Carolina Press, 1998.

Hartlyn, Jonathan: "Democracies in Contemporary South America: Convergences and Diversities." Unpublished paper, Department of Political Science, University of North Carolina, 1995.

Inter-American Development Bank: Latin America after a Decade of Reforms. Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1997.

Isasi Cayo, Juan Felipe: Cultura Política y Constitución 1993. Universidad de Lima, Lima 1997.

Johnson, Kenneth F.: Mexican Democracy: A Critical View. Praeger, New York, 1978.

Kay, Bruce H.: "Fujipopulism and the Liberal State in Peru, 1990-1995," Journal of InterAmerican Studies and World Affairs, Vol. 48 (Winter 1996-1997): 55-98.

Kenney, Charles: "Por qué el autogolpe? Fujimori y el Congreso, 1990-1992," en Fernando Tuesta Soldevilla (ed.): Los Enigmas del Poder: Fujimori 1990-1996. Fundación Friedrich Ebert, Lima, 1996.

Lambert, Peter: "The Regime of Alfredo Stroessner," en Peter Lambert and Andrew Nickson (eds.): The Transition to Democracy in Paraguay. St. Martin's Press, New York, 1997.

Latin American Studies Association, "The 1995 Electoral Process in Peru: A Delegation Report of the Latin American Studies Association," Latin American Studies Association and the North-South Center, Miami and Pittsburgh, March 1995.

Lewis, Paul H.: Paraguay under Stroessner. University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1980.

Linz, Juan J.: "Totalitarian and Authoritarian Regimes," in Fred I. Greenstein y Nelson W. Polsby (eds.): Handbook of Political Science: Macropolitical Theory. Addison-Wesley, Reading, Massachusetts, 1975.

Lowenthal, Abraham F.: "Latin America: Ready for Partnership?" Foreign Affairs, Vol. 72, No. 1 (Winter 1992-1993): 74-92.

Mainwaring, Scott: "Rethinking Party Systems Theory in the Third Wave of Democratization: The Importance of Party System Institutionalization," Paper presented at the Latin American Studies Association meeting, April 1997.

Mauceri, Philip: "Return of the Caudillo: Autocratic Democracy in Peru," Third World Quarterly, Vol. 18 (1997): 899-911.

McClintock, Cynthia: "La voluntad política presidencial y la ruptura constitucional de 1992 en el Perú," en Fernando Tuesta Soldevilla (ed.): Los Enigmas del Poder: Fujimori 1990-1996, Fundación Friedrich Ebert, Lima, 1996.

McColm, R. Bruce (ed.): Freedom in the World. Greenwood Press, Westport, Connecticut, 1992.

McDonald, Ronald H. y J. Mark Ruhl: Party Politics and Elections in Latin America. Westview, Boulder, 1989.

Middlebrook, Kevin J.: The Paradox of Revolution: Labor, the State, and Authoritarianism in Mexico. Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1994.

Miranda, Carlos R.: The Stroessner Era: Authoritarian Rule in Paraguay. Westview Press, Boulder, 1990.

O'Donnell, Guillermo, "Delegative Democracy," Journal of Democracy, Vol. 5 (January 1994): 55-69.

Palmer, David Scott: "'Fujipopulism' and Peru's Progress," Current History, Vol. 95 (February 1996): 70-76.

Pease García, Henry: Remando a Contracorriente. Gráficos del Congreso Constituyente Democrático, Lima, 1995.

Pease García, Henry: Los Años de la Langosta: La escena política del Fujimorismo. IPADEL, Lima, 1994.

Peeler, John A.: Latin American Democracies: Colombia, Costa Rica, Venezuela. University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1985.

Planas, Pedro A. Rescate de la Constitución. Abril Editores y Impresores, Lima, 1992.

Prezeworski, Adam: Democracy and the Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America. Cambridge University Press, New York, 1991.

Purcell, Susan Kaufman: "Decision-Making in an Authoritarian Regime," World Politics, Vol. 26 (No. 1 (October 1973): 28-54.

Promperú: Latinobarómetro 1996. Courtesy of Promperú.

Quincot, César Arias: La Modernización Autoritaria, Fundación Friedrich Ebert, Lima, 1994.

Roberts, Kenneth M.: "Neoliberalism and the Transformation of Populism in Latin America: The Peruvian Case," World Politics, Vol. 48 (October 1995): 82-116.

Rospigliosi, Fernando: "Las Fuerzas Armadas y el 5 de Abril," Monografía No. 73, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 1996.

Sheahan, John: "Effects of Liberalization Programs on Poverty and Inequality: Chile, Mexico, and Peru," Latin American Research Review, Vol. 32 (1997): 7-38.

Shifter, Michael: "Re-reelection Fever," Hemisfile, Vol. 9, No. 5 (September-October 1998): 8-9.

Stokes, Susan: "Peru: The Rupture of Democratic Rule," en Jorge I. Domínguez and Abraham F. Lowenthal (eds.), Constructing Democratic Governance: South America in the 1990s. Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1996.

Tamariz, Domingo L.: Historia del Poder: Elecciones y Golpes de Estado en el Perú. Jaime Campodonico, Lima, 1995.

Tanaka, Martín: "Los espejos y espejismos de la democracia y el colapso de un sistema de partidos: Perú 1980-1995, en perspectiva comparada," Paper presented at the Latin American Studies Association meeting, April 1997.

Tanaka, Martín: "Democratic Consolidation in Latin America: Competition Still Matters...Lessons from the Peruvian Experience," Paper presented at the Latin American Studies Association meeting, September 1998.

Tuesta Soldevilla, Fernando: "El impacto del sistema electoral sobre el sistema político peruano," pp. 105-168 en Fernando Tuesta Soldevilla (ed.), Los Enigmas del Poder: Fujimori 1990-1996. Fundación Friedrich Ebert, Lima, 1996.

Walter, Knut: The Regime of Anastasio Somoza, 1936-1956. University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1993.

Webb, Richard y Graciela Fernández Baca: Perú en Números 1997. Cuánto, Lima, 1997.

Perú en Números 1996. Cuánto, Lima, 1996.

Perú en Números 1994. Cuánto, Lima, 1994.

Werlich, David P.: Peru: A Short History. Southern Illinois University Press, Carbondale and Edwardsville, 1978.

Weyland, Kurt: “Neopopulism and Neoliberalism in Latin America: Unexpected Affinities.” Studies in Comparative International Development, Vol. 31 (1996): 3-31.